

**María Carolina Agoff**

**Del sentimiento de injusticia y el rol  
de las nuevas legislaciones  
contra la violencia de género en México**

Ciertas circunstancias resultan ideales para reflexionar y analizar la vivencia de la violencia entre las personas afectadas. En México, es posible encontrar tal situación ya que se observa, por un lado, un aumento dramático en los últimos años de la delincuencia y de la violencia delictiva, y por el otro, unas instituciones del Estado que parecen rebasadas por este fenómeno y que se muestran incapaces de contenerlo.<sup>1</sup>

En este contexto de incontables asesinatos por parte del narcotráfico y de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, donde ya se contabilizan 28.000 muertos (cifra correspondiente a octubre de 2010) desde el inicio de la llamada “guerra al narcotráfico”, con tasas de feminicidio altísimas (y no sólo en el caso internacionalmente conocido de Ciudad Juárez), migración indocumentada, trata de personas, etc., se han generado iniciativas legislativas para proteger a las mujeres frente a la violencia de género.

Aún dentro de este panorama de extrema violencia social, la casa sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para las mujeres en México. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 – ENDIREH (INEGI 2006), el 26,08% de las mujeres experimentó violencia física y/o sexual de parte de su novio, compañero o marido el año previo a la realización de la encuesta. De ese porcentaje sólo el 22,93% se dirigió a agencias gubernamentales de procuración de justicia. De acuerdo a los datos de esta misma encuesta, las víctimas de violencia de pareja de tipo física y sexual buscan ayuda en primer lugar entre sus familiares y en

---

<sup>1</sup> Esto ha generado distintas iniciativas por parte del gobierno federal. Dentro de ellas se encuentra la reforma procesal penal más importante desde 1917 que intenta garantizar el debido proceso en los juicios penales y al mismo tiempo, restringe garantías de ese debido proceso para la delincuencia organizada.

segundo lugar, acuden a cuerpos policiales o autoridades públicas. De todos modos un porcentaje mayoritario de 77,07% decide no buscar ayuda en instituciones gubernamentales, como tampoco denunciar a su pareja.

Así, en una cultura reinante de ilegalidad y de profunda desconfianza en las instituciones y en el papel del Estado como regulador de los conflictos, se producen legislaciones novedosas que apuntan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Nos referimos a las leyes federales: *Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres (aprobada en el 2007)* (Cámara de Diputados 2007a), y *Ley federal de Acceso a una vida libre de violencia* (Cámara de Diputados 2007b).

Son estas las circunstancias que reflejan una tensión esencial entre dos fuerzas opuestas, la impunidad y la defensa de los derechos.

Entiendo que las cuestiones de fondo atañen a la posibilidad y eventualmente a la eficacia para combatir la violencia de género a través de la esfera del derecho y también a los modos en que se vinculan los ciudadanos con el Estado a través de los derechos.<sup>2</sup> Mi propósito, no obstante, es indagar cuestiones relacionadas con la tensión entre la ley y la costumbre, teniendo como antecedente que la ley, a diferencia de los usos y costumbres, propone un idioma moderno e igualitario. Así, la cuestión que también plantea Segato (2003) en relación a la violencia moral es: ¿de qué modo puede incidir la ley en el sistema moral? o ¿cuál es la capacidad de impacto de la legislación sobre el arraigo de la violencia de pareja en la costumbre?

En lo que sigue me propongo abordar algunos elementos que se derivan de la mencionada tensión entre la ley y la costumbre, y de la posibilidad de la apropiación subjetiva de derechos por parte de mujeres víctimas de violencia de pareja dentro de este marco. Para ilustrar este punto se van a desarrollar tres temas relacionados con el tránsito hacia una cultura de los derechos. El primer punto concierne al surgimiento de un sentimiento de injusticia asociado a la vivencia de violencia de pareja y que antecede –al menos lógicamente– a la

---

2 Otra arista fundamental para entender este fenómeno pero que no pretendo abordar acá es la de la implementación de derechos y los problemas vinculados a la aplicación de la ley, la burocracia estatal, la violencia institucional, la ausencia del Estado de Derecho en ciertas regiones, la legislación, la falta de instrumentos, etc.

apropiación de un derecho. Hay en las mujeres una experiencia agravante no percibida que precede al reconocimiento de la violencia como delito y por tanto a la apropiación subjetiva de un derecho que las salvaguarda de la violencia de pareja. El segundo punto alude al conflicto entre normatividades de distinto sentido (moral y derecho) que pueden constituir un obstáculo para la apropiación y para el ejercicio efectivo del derecho a una vida libre de violencia. Y en tercer lugar se muestran los indicios incipientes de la eficacia simbólica de estas nuevas legislaciones, en particular de la capacidad y legitimidad del derecho para nombrar o nominar y para dar forma a nuevas identidades.

Por último, expondré una cuestión relacionada con la necesaria movilización de estas legislaciones, para concluir que a pesar de la cultura de ilegalidad reinante y la profunda desconfianza en las instituciones, hay un uso particular del derecho, en el plano simbólico, que da buena cuenta de los variados modos en que las sociedades pueden interpretar el derecho y movilizarlo para sus propios fines.

### **1. Del sentimiento de injusticia**

Una forma de análisis del sentido de injusticia experimentado por las víctimas es el estudio del tipo de argumentación que los propios actores construyen cuando quieren dar cuenta de las acciones de los demás o de ellos mismos.<sup>3</sup>

En efecto, la violencia de pareja se puede analizar desde las normas, valores e ideologías que están en la base de esta acción y que dan un marco explicativo a las motivaciones de quienes ejercen violencia, de quienes intentan explicarla en tanto víctimas, y de su justificación y legitimación. Así, la investigación empírica permite entrañar los argumentos que se dirimen alrededor de esta forma parti-

---

3 Las personas explican sus propios actos y comprenden el sentido de las acciones de los otros mediante procesos de atribución y reconstrucción de motivos (Wright 1979; Schütz 1993). Nos referimos con esto a una concepción social de los motivos que puede ser entendida también como un repertorio lingüístico socialmente preestablecido y apropiado para interpretar o explicar conductas en una situación dada. Los denominados “vocabularios de motivos” (Wright Mills 1981) permiten hacer justificables las acciones ante los demás y ante uno mismo, ya que se inscriben dentro del marco de aquello que socialmente es aceptado como razones de la acción.

cular de la violencia y facilita la reconstrucción de las orientaciones normativas y valorativas asociadas, y también del sentido de injusticia implícito en la experiencia de violencia.

En la vida cotidiana, las personas raramente se ven en la necesidad de remontarse al principio de justicia que sostiene sus argumentos, pero frente a la crítica, se origina el trabajo de justificación y reconstrucción (Boltanski 2000). Lo valioso de este análisis es que hace explícitos los valores y el principio de justicia detrás de las disputas conyugales que forman parte de la dinámica de violencia.

Hemos constatado que las mujeres ofrecen dos tipos de explicaciones subjetivas sobre las razones de la violencia que ejercen sus compañeros hacia ellas.<sup>4</sup> Están aquellas que atribuyen la violencia a fuerzas externas al hombre, como expresión incontrolada de afectos, fruto de las frustraciones laborales, de problemas de infancia, del consumo de alcohol, etc. Estas mujeres no parecen sentirse víctimas de una injusticia, sino que dan muestras de un sufrimiento que se vive como inevitable y, en casos extremos, como legítimo (Moore 1978: 458 y ss.). Al respecto existe evidencia de una extendida creencia, en hombres y mujeres, de que la violencia de pareja no intencional es aceptable y que sin intención no hay atribución de responsabilidad (Eisikovitz/Winstok/Fishman 2004).

El otro tipo de explicaciones sobre el origen de la violencia de pareja, apunta a la idea de un acto consciente de parte del maltratador. La violencia que se experimenta como castigo intencional de parte del hombre y que se origina en el supuesto “mal comportamiento” de la mujer, no favorece las mismas explicaciones exculpatorias, ni resulta igualmente tolerable. Aquí las explicaciones subjetivas de las víctimas dan cuenta de motivaciones asociadas a la voluntad de encauzar, imponer o castigar ciertos comportamientos de la mujer y sugieren que la violencia resulta un medio de restablecer el control hegemónico del hombre.

---

4 Se trata de dos investigaciones empíricas de naturaleza cualitativa. La primera realizada en el 2003 en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud de México (INSP, SSA 2003). La segunda investigación fue financiada por CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y se llevó a cabo en el año 2008. La muestra de ambas investigaciones empíricas estaba compuesta por mujeres víctimas de violencia de pareja entre los 18 y los 65 años, con un perfil de usuarias de servicios de salud públicos.

Los argumentos que se esgrimen durante el conflicto que conduce a la violencia ponen de manifiesto el vocabulario de motivos legitimado socialmente y la relación de subordinación de la mujer al hombre que se expresa de manera paradigmática en la frase de uso corriente “pedir permiso al marido”.

Aquellas mujeres cuyas explicaciones subjetivas ubican el origen de la violencia en la motivación consciente de dominio masculino, muestran un umbral menor de tolerancia a la violencia y atribuyen claramente la responsabilidad del maltrato al hombre abusador, aunque dan cuenta de sentimientos ambivalentes. No cabe duda que estas mujeres experimentan la violencia que se ejerce contra ellas con un profundo malestar.

Así, los relatos de las víctimas sugieren que la experiencia de violencia se vive al menos de los siguientes modos:

- a) como un sufrimiento legítimo, asociado al incumplimiento de ciertas expectativas de comportamiento femenino en el ámbito doméstico;
- b) como algo inevitable, que adquiere la forma fatalista de la frase “es mi cruz”; o entendido como parte de un destino “natural” en toda mujer;<sup>5</sup>
- c) como un “castigo inmerecido”, pero lejos aún de ser considerado una transgresión o una conducta condenable o sancionable como delito.

Sólo el último modo deja en evidencia un sentimiento de injusticia aunque todavía atado a una comprensión tradicional de los roles de género, entendidos como el deber ser de las mujeres en sus relaciones de pareja, y que son en gran parte responsables de “los niveles de tolerancia social que encubren la identificación de la violencia y contribuyen a su perpetuación dentro del ámbito privado” (Güezmes/Palomino/Ramos 2002: 56).

---

5 El concepto de “preferencias adaptativas” podría ofrecer una explicación a la experiencia subjetiva de violencia que expresa la imposibilidad de percibir la injusticia. Amartya Sen y Jon Elster hablan de preferencias adaptativas cuando la gente no puede evaluar un tipo de trato como injusto, humillante o malo, pues ajusta sus expectativas a las condiciones de privación en las que vive (Nussbaum 1999).

Los sentimientos de vergüenza y culpa expresados en sus testimonios también dejan en evidencia que las mujeres difícilmente pueden cuestionar –hasta ahora– las normas y valores sociales que orientan el comportamiento de hombres y mujeres, y que constituyen la base de la justificación y legitimación de la violencia.<sup>6</sup> De acuerdo a este conjunto de orientaciones valorativas y normativas tradicionales, el matrimonio resulta una suerte de “camino obligado” tanto para hombres como para mujeres, pero a diferencia del caso de los hombres la identidad femenina y los roles sociales de la mujer están exclusivamente definidos en el marco de su matrimonio y familia. Aún en sociedades tan disímiles a la mexicana como la india, encontramos las mismas definiciones de la ideología familiar: las buenas madres son estoicas y abnegadas, las buenas esposas, castas y obedientes, y las buenas hijas, virginales y hacendosas (Sitaraman 1999).

En este contexto de normas y valores sociales es donde la violencia cobra un sentido particular: se trata de una sanción legítima (“es que tu no lo cuidas” o “es que tú lo provocas”) o de una falta permisible (“ay señor, no exagere”) o de un destino que hay que aceptar (“por eso pasamos todas”, “es tu cruz”). Por su parte, la vivencia de violencia como “castigo inmerecido” sugiere la posibilidad de justificar la violencia o merecerla en ciertos casos (en el caso de incumplimiento de las expectativas depositadas en ellas, como mujeres). Con ello se observa una comprensión particular de la injusticia que pone de manifiesto la distancia que separa aún a la violencia como “castigo inmerecido” de la violencia como delito o como algo inaceptable.<sup>7</sup>

## 2. Del conflicto entre normatividades

La particular relación de influencia recíproca entre la identidad social, la valoración intersubjetiva y el reconocimiento jurídico (Honneth 1997), nos brinda una vía analítica fructífera para comprender

---

6 La vergüenza nos habla de una experiencia de humillación (y no de injusticia) en el sentido descrito por Margalit y según el cual uno se avergüenza o se ve humillado por un rasgo de la autodefinición conectado a la pertenencia a un grupo en particular, en este caso el de las mujeres (Margalit 1996).

7 Es decir, no hay lo que Felstiner/Abel/Sarat (1980-81) llaman *perceived injurious experience*; para ello se requiere identificar la ofensa como tal, y nombrarla.

las dificultades que supone la apropiación y ejercicio de un derecho individual a una vida libre de violencia y a una comprensión de la dignidad atada a la integridad y a la autonomía, como garantías individuales.<sup>8</sup> En efecto, la investigación empírica deja en evidencia el obstáculo que supone el conflicto entre normatividades, o entre diferentes formas del reconocimiento –el jurídico y el moral–. Se trata de la tensión entre, por un lado, las normas sociales que guían el ejercicio de rol de género y la valoración social a nivel intersubjetivo y, por otro lado, las normas jurídicas que traducen el problema social a términos individuales, “atentando” contra el status naturalizado de las mujeres como madres-esposas. Ambas formas del reconocimiento social están reñidas y dificultan el surgimiento e internalización de una cultura de derechos emancipatoria.

La coerción que ejercen las expectativas sociales de conformación de una familia, junto al mandato fatalista expresado en la frase “es tu cruz” que se transmite de madre a hija, refuerzan el deber de la sumisión al marido y contribuyen a naturalizar la violencia y a tolerarla.

Precisamente, la violencia de pareja es un conflicto social que deja en evidencia que las familias, con mucha frecuencia, lejos de ser una fuente de apoyo para las víctimas, imponen a las mujeres un imperativo de sometimiento al hombre y a su violencia.

Son en especial las mujeres de la familia política (suegra, hermanas) quienes colaboran en la creación de contextos de vulnerabilidad, a través de la descalificación moral de la mujer, y que facilitan la aparición de la violencia o incluso la propician.<sup>9</sup>

En los casos estudiados, los efectos negativos de los vínculos familiares se hacen particularmente evidentes al observar el contexto

---

8 Honneth (1997) desarrolla un concepto de persona y un sí mismo dependiente de tres formas del reconocimiento intersubjetivo –amor, derecho y respeto o valoración social–. Estas tres formas del reconocimiento tienen como contracara tres formas de desdén o menosprecio, experiencia que puede constituirse como motivo de acción en la conformación de conflictos sociales.

9 En los casos extremos, la familia política basuriza (como forma extrema de la descalificación moral y el desprecio) a la mujer como nuevo miembro de la familia. Según Silva Santisteban (2008) la basurización es el mecanismo simbólico que justifica, legitima la construcción del subalterno o excluido y asegura así su instrumentalización. Sobre la “colaboración” femenina a la dominación del hombre ver Bourdieu (2000).

familiar como un entramado compuesto por precarias condiciones materiales de existencia, por la posición de la mujer en la estructura familiar y por el conjunto de normas y valores sociales que pautan la relación entre los géneros (Agoff/Herrera/Castro 2007). La idea de la preservación de la integridad familiar a través de arreglos tradicionales asociados a la residencia patrilocal y a la dependencia económica del varón, ponen aún más en riesgo a las mujeres. Son también las expectativas e ideales de familia y conyugalidad y de embarazos dentro del matrimonio lo que lleva a las familias a someter a sus hijas a matrimonios forzados en casos de embarazos. Lagarde (1990) ha puesto de manifiesto estas orientaciones valorativas de la sociedad mexicana que brindan una explicación al fenómeno de los matrimonios forzados. Y si bien la justificación de estos arreglos se expresan en la forma de expectativas morales y cumplimiento de estos ideales, no debe dejarse de tener en cuenta que con frecuencia se trata de arreglos que obedecen a una muy precaria situación económica y a la presión por encontrar una fuente de sostén económico para la hija embarazada.

Estas normas y valores poco tienen que ver con la realidad cotidiana de hombres y mujeres, con sus formas reales de comportamiento y experiencias. Pero precisamente, es tal la distancia que separa la norma de la realidad, que la fuerza de las adscripciones normativas es reforzada de un modo más intenso y frecuente (Hausen 1990: 269). Lo que, no obstante, no deja de tener una importancia decisiva, es que este conjunto de normas e ideales constituyen la base de la legitimación de la violencia contra la mujer.

Resulta evidente que en este medio familiar la mujer se ve privada de recursos, de poder y de libertad como resultado de las desigualdades económicas, generacionales y de género, todo lo cual produce un ámbito de gran vulnerabilidad.<sup>10</sup>

En síntesis, la fuerza de los usos y costumbres para regular la vida social y el rol que juega la comunidad como la fuente del reconocimiento social por excelencia supone indudablemente un obstáculo

---

10 La ENDIREH 2006 revela cifras que dan buena cuenta de que la familia no constituye en estos casos una fuente de apoyo: casi dos de cada tres mujeres (64,6%) toma otro camino que el de recurrir a su familia. El 11,43% de las mujeres con violencia física o sexual dicen no acudir a las autoridades públicas para que no se entere su familia (Frías 2010).



para que las mujeres tomen conciencia de sus derechos y los ejerzan. Son los valores tradicionales los que tienen primacía sobre cualquier otra forma del reconocimiento y estos pautan el reconocimiento de una identidad e ideal femenino en la conformación y mantenimiento de una familia. Frente a la violencia de pareja, apelar a los derechos, a la dignidad o valores más individuales vinculados al respeto y a la autonomía puede poner en riesgo la posibilidad de autoafirmación que les confiere a las mujeres un matrimonio unido.

De este modo, las mujeres violentadas –para defender su integridad individual–, se enfrentan a la cuestión no sólo de perder su propia valoración social, sino frente al dilema de “traicionar” a su pareja y a su familia, cuyos status están también sujetos a su “buen comportamiento” y sometimiento. Otras culturas también hacen responsable a la mujer del honor de la familia y de la deshonra que cae sobre todos los miembros familiares en caso de que ella no “salve el matrimonio”, al no velar por la unidad y continuidad del grupo familiar (Chatzifotiou/Dobash 2001).

Denunciar y usar la ley significa, para una mujer, acudir a la ayuda de un tercer partido, fuera de la familia y la comunidad, y esto puede generar ostracismo y fuertes críticas del entorno (Herman 2005).

Y así como las familias son con demasiada frecuencia quienes expresan un mandato de subordinación y tolerancia en nombre de las buenas costumbres y el honor de la familia, otras personas del entorno social de estas mujeres pueden colaborar para que ellas tomen conciencia de su situación y reconozcan el agravio. Se trata de relaciones de amistad o vecinales, es decir vínculos de naturaleza horizontal, de mayor simetría y espontaneidad, que les “abren los ojos” a las mujeres (expresión que designa el fin de la naturalidad y normalidad de la violencia). Estos vínculos sociales constituyen una fuente de apoyo pues precisamente desnaturalizan la violencia. Aquí la ausencia de los conflictos de intereses generados por la distribución de recursos escasos, por posiciones de poder generadas en los roles diferenciados al interior de la familia y por expectativas tradicionales de comportamiento, facilita intercambios de solidaridad y ayuda mutuos. También las asociaciones civiles o públicas resultan una fuente de apoyo ya que promueven en primera instancia los derechos de la mujer y posibilitan que la mujer se autorreconozca como víctima del maltrato (Agoff/Herrera/Castro 2007).

De este modo, es posible ver que existen, al menos, dos elementos de indagación en la génesis de un sentimiento de agravio asociado a la experiencia de violencia, que resultan de gran valor heurístico. Tenemos, por un lado, el problema de la afiliación o de los otros en general, como testigos, cómplices o fuente de apoyo de las víctimas.<sup>11</sup>

Por otro lado, el vocabulario moral y emocional permite también descubrir los límites de las experiencias consideradas como válidas o no completamente reprobables. Expresiones tales como “lo bien portada que debe ser una esposa”, “su mujer no se merece que la golpeen, es una buena persona”, “pedir permiso al marido”, “él debe darme para el gasto”, etc., dan cuenta de la infantilización de las mujeres, de su consecuente necesidad de tutelaje y de su posición subordinada al compañero, que abre la vía a cualquier forma de la violencia masculina. El lenguaje moral y emocional refuerza y reproduce el status de subalterno o la condición de sujetos minorizados (Segato 2003), las cuales buscan conmiseración frente a su situación y se sienten avergonzadas de lo que les sucede.

Por el contrario, la indignación en tanto es “un sentimiento con un revestimiento moral que conlleva en sí una cierta idea de restitución” (Silva Santisteban 2008: 90) podría ser indicativo de una cierta transformación de las conciencias en el sentido de una idea de injusticia asociada a la experiencia de violencia.

### 3. La eficacia simbólica del derecho

La universalidad del fenómeno de la violencia de género y en particular de la violencia de pareja se asienta, entre otras cosas, en la primacía de los roles familiares de las mujeres —como hijas, esposas y madres—, por sobre cualquier otro rol social. La contracara de esto resulta la autoridad masculina en todos los campos de decisiones, no solo en el familiar. Es frecuente observar que los maridos reglamentan los modos de vestir de las mujeres, son quienes les otorgan permisos para trabajar o estudiar, deciden si las mujeres pueden frecuentar amistades. Sin embargo, los testimonios recogidos parecen sugerir

---

11 El rol de los hijos en la decisión de separarse de las mujeres es ambiguo: algunas se separan por ellos, otras permanecen en la familia alegando los mismos motivos. Ciertamente es que los hijos menores siempre resultan víctimas, junto a sus madres, de la violencia masculina.

que estamos en una transición cultural con indicios de cambios, y otros de conservación de la ideología de género y familiar. Sorprendentemente las generaciones de mujeres más jóvenes no son tan permeables a los discursos de derechos, como las mayores de 35 años, para quienes las nuevas legislaciones comienzan a resonar de algún modo.

Estas mujeres ven reflejados sus problemas en los discursos públicos sobre los nuevos derechos, aunque de un modo particular: los significados de sentido común asociados a estas nuevas legislaciones están lejos aún de la idea de igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres entrevistadas reconocen en estos discursos su derecho a la integridad física, su “derecho a ser respetadas”. Podemos con ello presuponer que esta forma peculiar de apropiarse de un derecho es distinta a la noción de derecho a la igualdad, aún muy ajena a estas mujeres como reclamo.

La movilización de estos derechos como lenguaje de igualdad resulta una tarea pendiente y necesaria si, tal como afirma Smart (1994), este lenguaje puede ser reclamado por todas las personas, con independencia del género o la clase.<sup>12</sup>

Ni la noción de igualdad, ni la de autonomía personal como derechos individuales parecen posibles aún en el universo discursivo y de prácticas de estas mujeres. La noción de justicia en ellas sugiere ante todo una asociación con la dignidad (esto es, como lo opuesto a la experiencia de humillación).

Con todo ello podemos hipotetizar además que la interpretación de sentido común que se hace de estas nuevas legislaciones está lejos todavía de enjuiciar la desigualdad de género, sino que se acerca más a la condena a la violencia explícita (en sus formas variadas de violencia sexual, económica, emocional o física) como medio para obtener o mantener la subordinación de las mujeres. De igual modo que los hombres violentos que recurren a terapia de rehabilitación,<sup>13</sup>

---

12 Resulta interesante preguntarse si así como la noción liberal de la justicia peca de ingenua en relación al acceso a la justicia y se muestra ciega al género, a la pobreza y a la raza, las víctimas, como contrapartida a esto, tampoco se ven reflejadas en el liberalismo clásico que no las incluye de facto como iguales.

13 Se trata de una investigación en curso sobre las concepciones de masculinidad que privan entre los hombres violentos con sus parejas, que asisten a terapias grupales de rehabilitación.

difícilmente ponen en duda la relación de dominio-subordinación entre hombres y mujeres, sino que frente a los nuevos discursos en contra de la violencia, cuestionan la violencia como modo de imponer el dominio, pero no el dominio mismo.

A pesar del poder simbólico de las nuevas legislaciones, se observa en la aptitud de desnaturalizar una experiencia de injusticia naturalizada y normalizada por las tradiciones. Esto obedece a que el derecho puede constituirse en un lenguaje que les permite a las mujeres decodificar el significado de la violencia de un modo diferente al conocido: se trata de una experiencia naturalizada que el derecho ahora –en tanto lenguaje legítimo– nombra o designa como delito. Así las mujeres comentan con asombro “dicen que ahora es un delito”.

Con esto puede verse la eficacia y legitimidad del derecho –aún en sociedades con escasa confianza en las instituciones– para definir la realidad a través de su poder de nominación, para darle nuevos significados o un nuevo lenguaje a los problemas cotidianos. Las mujeres aprenden a hablar de sus experiencias con otras categorías del lenguaje, significando las cosas de otro modo (Merry 1997).

Así, la fuerza simbólica del derecho radica entre otras cosas en la posibilidad de acabar con el preexistente (y único) horizonte referencial.

Además, es posible observar el impacto simbólico del derecho en el desarrollo de la subjetividad, al devolverles a las mujeres su carácter de sujeto. Los testimonios de las víctimas de violencia reflejan relatos biográficos de sucesos, sin opciones, sin un sujeto en la forma de “un yo” con un proyecto individual de vida. La mujer resulta parte de un grupo indivisible –la familia– y las legislaciones que la protegen de la violencia, en tanto la apelan en su carácter de sujeto de derechos, le hacen actuar con comprensión de sí mismas como individuos con derechos, como individuos con derecho a actuar en su nombre.

Ahora bien, ¿puede ser el derecho y la exigencia de justicia una vía para construir una subjetividad como individualidad? Dado que hasta ahora el ser mujer se vive como digna y merecedora de respeto en su rol de madre-esposa, cabe preguntarse si el derecho puede ser un nuevo espacio de autoidentificación, que posibilite la individuación como subjetividad no atada ni al proyecto familiar exclusivamente ni a la desigualdad, y pueda así garantizar una forma de re-

conocimiento que sustituya este ideal femenino tradicional de la abnegación.<sup>14</sup>

Dado que el derecho de las mujeres moviliza una concepción de sujeto contraria a la que prevalece en el imaginario y prácticas sociales del sujeto tutelado que debe ser representado, su eficacia simbólica radica también en su capacidad de moldear nuevas identidades de género asociadas a la autonomía y el empoderamiento. No esperar conmiseración o misericordia, sino reparación moral, puede resultar otro indicio del devenir de un sujeto social empoderado por una (nueva) conciencia legal, es decir, un sentido de sí como persona definido por el derecho (Merry 1997).

Se ha enfatizado ya el poder de la ley para, entre otras cosas, definir la identidad personal. No se trata sólo de una cuestión de definición de la personalidad legal (la naturaleza jurídica del sujeto o ciudadano) con propósitos de regulación, sino de aspectos asociados a la vida social en la forma de expectativas, responsabilidades y restricciones (Cotterrell 2004).

#### **4. Consideraciones finales**

La tensión entre la ley y la costumbre se expresa como una disputa por los modos de interpretar un conflicto social y pone en duda esa comprensión común y naturalizada de las víctimas y de las personas de su entorno, quienes interpretan el fenómeno de la violencia en un lenguaje de virtudes femeninas, es decir, entendiendo la violencia como castigo merecido o en el mejor de los casos, inmerecido, en resumen como una sanción legítima y no en un lenguaje de derechos y de violencia como delito.

Esta tensión entre ley y costumbre se cristaliza en la disputa entre el derecho a la integridad y autonomía de la mujer versus el ideal de la unidad familiar. Esta tensión expresa también la distancia que separa los valores y normas que reinan en el mundo de la vida del ideal normativo del derecho. En el mismo sentido y tal como afirma Fraser (1989) en su crítica a Habermas, la esfera privada del mundo de la vida juega un papel central en la reproducción de la vida simbó-

---

14 “Los sujetos constituidos identitariamente en referencia a la feminidad se debaten en una dinámica ser-deber ser irremediamente nociva para la configuración de un yo unitario” (Serret 2001: 148).

lica y material de la sociedad y las desigualdades políticas y sociales, y por tanto en la reproducción y constitución de las inequidades de género. Así, las posibilidades de la vida no están solo restringidas por imposiciones sistémicas en la forma de colonización del mundo de la vida.

Antes bien, estas diversas esferas o fuentes de reconocimiento son relaciones sociales insustituibles y en tanto ejercen influencias recíprocas, se complementan. En efecto, si tal como sostiene Honneth (2009) la textura o la materia de la justicia social es la garantía de la autonomía personal y esta sólo se alcanza por las diferentes vías intersubjetivas de reconocimiento (de la esfera de las relaciones íntimas, de las relaciones jurídicas y del trabajo), podemos derivar que un reconocimiento jurídico sin una valoración social puede dejar trunco el desarrollo completo de la autonomía personal, ya que las relaciones de reconocimiento son condiciones decisivas de aquella.

Sostiene Honneth que una de estas formas de intersubjetividad práctica está influenciada inmediatamente por la actividad del Estado, donde este interfiere de modo directo en las condiciones de relación de reconocimiento, al modificar la inclusión de los derechos subjetivos, al incluir nuevos grupos sociales o declarar realidades modificadas como circunstancias jurídicamente relevantes. Esta esfera sienta las bases del reconocimiento recíproco de las personas como ciudadanos iguales y libres. En contrapartida, las otras dos esferas de reconocimiento recíproco –las relaciones familiares y el trabajo– no son muy abiertas a la influencia legal estatal: el Estado de derecho no puede intervenir en una mejora de las condiciones de reconocimiento en las relaciones familiares o sus medios resultan muy limitados para lograr su influencia aquí (Honneth 2009: 364).

Si bien, como afirma este mismo autor, el Estado de derecho por sus competencias regulatorias a través de los derechos protegidos por sanciones puede garantizar el reconocimiento jurídico de los ciudadanos, su poder es limitado si la justicia social no es también conquistada y asegurada por el poder de la sociedad civil. Así diversas agrupaciones civiles pueden constituirse en agencias de realización de justicia al favorecer condiciones de reconocimiento, tal como es el caso de los citados refugios para mujeres víctimas de violencia, o asociaciones civiles que les prestan ayuda. El problema radica en la coexistencia de diferentes principios morales según los cuales se

orientan las diferentes formas de reconocimiento y que oscilan entre lo tradicional o consuetudinario, en el caso de las relaciones familiares y comunitarias, y lo equitativo e igualitario (es decir, donde los individuos se reconozcan como iguales y libres), del lado de las relaciones jurídicas.

El reconocimiento jurídico, por su parte, presenta otras dificultades o límites ya que difícilmente puede por sí solo desafiar las condiciones estructurales que provocan la desigualdad de género. Dado que el sistema jurídico liberal entiende los problemas sociales como conflictos individuales e intenta solucionarlos en ese nivel, puede sin proponérselo atentar contra la lucha por la igualdad de género que es el problema de fondo. En efecto, si partimos de la idea de que la violencia de pareja es una de las tantas expresiones de la violencia de género, podemos afirmar que la penalización de la violencia de pareja conduce a una privatización de las causas (Pitch 2003).<sup>15</sup> Se trata de un problema que en principio es de naturaleza colectiva o, como afirma Howe (1987), es claramente *a gender-specific social injury*.

Tamar Pitch (2003) lo ejemplifica a través del caso de la movilización por el divorcio y el aborto en Italia. Históricamente esta tuvo como consigna la necesidad de afrontar problemas sociales tales como la liberación del colectivo femenino, más que garantizar libertades individuales. Sin embargo, el funcionamiento de la legislación misma sobre el aborto se apoya en la autodeterminación, la libertad de disponer del propio cuerpo y de la propia vida, que implica el reconocimiento de un poder individual. En este sentido, la ley despolitiza la cuestión del aborto, al trasladarla del plano del interés colectivo y de la comunicación pública al interés individual.

Así, el lenguaje de los derechos sustituye al de la opresión y de la discriminación. Los conflictos crecen impulsados más en nombre de las “víctimas”, que de los oprimidos, es decir, por sujetos que comparten no tanto una condición social que determina toda su existencia, sino el haber sufrido ofensas particulares por parte de categorías de sujetos individualizables.

---

15 En efecto y tal como sostiene Larrauri, es conveniente cambiar el mensaje actual de la legislación de la violencia de género que tiene que ver con la criminalización de un problema social. El objetivo en primer lugar debería ser lograr una mejor protección de las mujeres (Larrauri 2007: 136).

Dado que la nueva ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia garantiza libertades individuales, la ausencia de una movilización y sensibilización de la violencia como problema social, puede poner en riesgo la lucha colectiva, dejando el problema a merced de cada individuo y no como ofensa moral y asunto que compete a todo el colectivo femenino.

Se trata de no “dejar de hacer publicas las posibilidades de aspirar a derechos, garantías y protecciones” (Segato 2003: 16) ya que al sostener la movilización es posible enfatizar su eficacia simbólica como instrumento de propaganda y agitación; como forma de incidir “en la moral, las costumbres y el substrato prejuicioso del que emanan las violencias” (Segato 2003: 16).

Precisamente, para que estos derechos surtan efectos requieren ser movilizados e interpretados por la sociedad como tales (Felstiner/Abel/Sarat 1980-81), esto es, la sociedad debe incorporarlo a su representación del mundo social. Un cambio legislativo sin una amplia y sostenida movilización social puede resultar en detrimento de una apropiación y ejercicio de derechos, como también en una juridificación del problema, dando como resultado un panorama de derechos sin reivindicaciones.

## Bibliografía

- Agoff, Carolina/Herrera, Cristina/Castro, Roberto (2007): “The Weakness of Family Ties and their Perpetuating Effects on Gender: A Qualitative Study in Mexico”. En: *Violence Against Women*, 13, pp. 1206-1220.
- Boltanski, Luc (2000): *El Amor y la Justicia como competencias. Tres ensayos de sociología de la acción*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bourdieu, Pierre (2000): *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Cámara de Diputados (2007a): *Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres*. En: <www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf> (23.05.2011).
- (2007b): *Ley federal de Acceso a una vida libre de violencia*. En: <www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGAMVLV> (23.05.2011).
- Chatzifotiou, Sevaste/Dobash, Rebecca (2001): “Seeking Informal Support: Violence against Women in Greece”. En: *Violence Against Women*, 7, pp. 1224-1250.
- Cotterrell, Roger (2004): “Law in Culture”. En: *Ratio Juris*, 17, 1, pp. 1-14.
- Eisikovitz, Zvi/Winstok, Zeev/Fishman, Gideon (2004): “The First Israeli National Survey on Domestic Violence”. En: *Violence Against Women*, 10, pp. 729-748.



- Felstiner, William L. F./Abel, Richard L./Sarat, Austin (1980-81): "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming". En: *Law and Society Review*, 15, 3-4, pp. 631-654.
- Fraser, Nancy (1989): *Unruly Practices. Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*. Oxford: Polity.
- Frías, Sonia (2010): "Strategies and Help-Seeking Behavior in Law Enforcement Offices Among Mexican Women Experiencing Partner Violence". (Manuscript submitted to *Violence Against Women*).
- Güezmes, Ana/Palomino, Nancy/Ramos, Miguel (2002): *Violencia sexual y física contra las mujeres en Perú. Estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres*. Lima: OMS/Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán/Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- Hausen, Karin (1990): "Überlegungen zum geschlechtsspezifischen Strukturwandel der Öffentlichkeit". En: Gerhardt, Ute et al. (orgs.): *Differenz und Gleichheit: Menschenrechte haben (k)ein Geschlecht*. Frankfurt am Main: Helmer, pp. 155-161.
- Herman, Judith L. (2005): "Justice from the Victim's Perspective". En: *Violence Against Women*, 11, 5, pp. 571-602.
- Honneth, Axel (1997): *Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- (2009): "A textura da justiça. Sobre os limites do procedimentalismo contemporâneo". En: *Civitas – Revista de Ciências Sociais*, 9, 3, pp. 325-368.
- Howe, Adrian (1987): "'Social Injury' Revisited: Towards a Feminist Theory of Social Justice". En: *International Journal of the Sociology of Law*, 15, pp. 423-438.
- INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2006): *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH)*. México, D.F.: INEGI.
- INSP (Instituto Nacional de Salud Pública)/SSA (Secretaría de Salud) (2003): *Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM)*. Cuernavaca: INSP.
- Lagarde, Marcela (1990): *Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas*. México, D.F.: UNAM.
- Larrauri, Elena (2007): *Criminología crítica y violencia de género*. Madrid: Trotta.
- Margalit, Avishai (1996): *The Decent Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Merry, Sally (1997): "Gender Violence and Legally Engendered Selves". En: *Identities*, 2, 1-2, pp. 49-73.
- Moore, Barrington (1978): *Injustice: the Social Basis of Obedience and Revolt*. London: Macmillan.
- Nussbaum, Martha (1999): "Women and the Decent Society: The Case of India". En: Folkers, Gerd/Nowotny, Helga/Weiss, Martina (eds.): *Sternwarten-Buch: Jahrbuch des Collegium Helveticum II*. Zürich: Haffmans, pp. 90-117.
- Pitch, Tamar (2003): *Un derecho para dos: la construcción jurídica de género, sexo y sexualidad*. Madrid: Trotta.

- Schütz, Alfred (1993): *La construcción significativa del mundo social*. Barcelona: Paidós.
- Segato, Rita (2003): “La argamasa jerárquica: violencia moral, reproducción del mundo y la eficacia simbólica del derecho”. Brasília: AGENDE (Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento).
- Serret, Estela (2001): *El género y lo simbólico. La constitución imaginaria de la identidad femenina*. México, D.F.: UAM-Azcapotzalco.
- Silva Santisteban, Rocío (2008): *El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.
- Sitaraman, Bhavani (1999): “Law as Ideology: Women, Courts and Dowry Deaths in India”. En: *International Journal of the Sociology of Law*, 27, pp. 287-316.
- Smart, Carol (1994): “La mujer en el discurso jurídico”. En: Larrauri, Elena (comp.): *Mujer, derecho penal y criminología*. Madrid: Siglo Veintiuno, pp. 167-177.
- Wright, Georg H. von (1979): *Explicación y comprensión*. Madrid: Alianza.
- Wright Mills, Charles (1981): *Poder, política, pueblo*. México, D.F.: FCE.